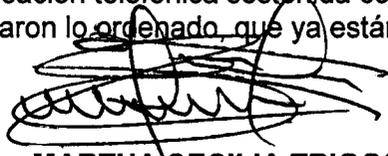


Interlocutorio No. 0269

S E C R E T A R I A.- La Macarena (Meta) seis (06) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Al Despacho del señor Juez Incidente de Desacato No. 503504089001 2021 00081 00, informándole que las incidentadas contestaron la demanda en términos. Provea.

Es de indicar que, en conversación telefónica sostenida con la Incidentante, manifestó que si le cumplieron, le suministraron lo ordenado, que ya están al día.



MARTHA CECILIA TRIGOS
Secretaria

JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE LA MACARENA META, seis (06) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

PROBLEMA JURIDICO.

Entra el despacho a decidir lo que en derecho corresponda respecto del incidente de Desacato, formulado por la ciudadana Ingrid Tatiana Velandia Melo, contra CAPITAL SALUD EPS y SIKUANY LTDA., por incumplimiento a fallo de tutela.

I. ANTECEDENTE.

1. De los Hechos.

Los expone y serán resumidos de la siguiente manera:

- 1). "Presente una acción de tutela en contra de la EPS CAPITAL SALUD y SIKUANY LTDA., el día 15 de marzo de 2021".
- 2). "..."
- 3). "Mediante fallo de fecha 05 de abril de 2021, concedió la tutela".
- 4). "..."
- 5). "Ordenar a la accionada Capital Salud Eps-s, que, dentro de un término de 48 horas, si no lo ha hecho, realice la entrega real y material de la cantidad del medicamento TOPIRAMATO 15 MG CX60 CAP (TOPAMAC STRING cantidad 180 y de los pañales desechables, marca WINNY EPTA 5 en cantidad de 270 unidades...".
- 6). "Ordenar a la accionada SIKUANY LTDA., que dentro del término de 48 horas, realice la entrega real y material de la cantidad del medicamento TOPIRAMATO 15 MG CX60 CAP (TOPAMAC SPRING cantidad 180 y de los pañales desechables, marca WINNY, ETAPA 5 en cantidad de 270 unidades...".
- 7). "..."
- 8). "..."

9). "a la fecha SIKUANY no ha cumplido a satisfacción, toda vez que no ha hecho entrega de los 180 pañales, marca WINNY, ETAPA 5, correspondientes al mes de septiembre y octubre de 2021".

2. De las Pretensiones.

La Incidentante, solicita las siguientes:

1. "...".
2. "...".
3. "...".
4. "...".
5. "...".

3. De la Orden en la Tutela.

Mediante sentencia No. 006 de abril 05 de 2021, el Juzgado resolvió tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna invocados por la ciudadana Ingrid Tatiana Velandia Melo en representación de la menor de edad Karol Dallana Narváez Velandia y ordenó a CAPITAL SALUD EPS-S, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, realice la entrega real y material de la cantidad del medicamento TOPIRAMATO 15 MG CX60 CAP (TOPAMAC SPRING cantidad 180 y de los pañales desechables, marca WINNY, ETAPA 5 en cantidad de 270 unidades y a SIKUANY LTDA. hacer entrega de la cantidad del medicamento TOPIRAMATO 15 MG CX60 CAP (TOPAMAC SPRING cantidad 180 y de los pañales desechables, marca WINNY, ETAPA 5 en cantidad de 270 unidades, que debe suministrar la menor de edad Karol Dallana Narváez Velandia.

II. ACTUACION PROCESAL.

A consecuencia de la solicitud de Incidente de Desacato elevada por la señora Ingrid Tatiana Velandia Melo, por incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 05 de abril de 2021, este Juzgado con auto octubre 20 de 2021 y previo a dar inicio al incidente de desacato, requiere al Superior Jerárquico de las accionadas, representadas por su Gerente a nivel Nacional y Regional Meta, para que en un término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del auto, diere cumplimiento a dicha providencia de la cual no se interpuso recurso alguno.

Posteriormente, con auto de noviembre 04 hogaño, procedió a conceder un término adicional de otras 48 horas para que diera cumplimiento al mencionado fallo de tutela y a lo solicitado en el anterior auto.

1. Contestación de la Incidentada.

Sikuany Ltda., contesta la demanda en términos, en la que dice que ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela y a causa de ello, solicita se archive el proceso de Incidente de Desacato, toda vez que Sikuany S.A.S., ha realizado las entregas direccionadas por parte de la EPS.

2. De la Incidentante.

En comunicación telefónica sostenida el día 03 de diciembre de 2021 con la Incidentante Ingrid Tatiana Velandia Melo, a través del abonado celular No. 310 584 8328, manifestó que si cumplieron las accionadas con todo, que a la fecha están al día con todo.

III. CONSIDERACIONES.

Se tiene que la acción de tutela está consagrada en nuestra Constitución Política, concretamente en su art. 86, reglamentada, por el Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. Se trata de un mecanismo creado con el único fin de buscar la protección inmediata y eficaz de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por la acción de los particulares en los casos previstos legalmente. Se caracteriza de cualquier otra acción por la subsidiaridad e inmediatez.

Esta acción no es otra instancia judicial que una vía paralela o alternativa de solución de conflictos y menos puede utilizarse para sustituir al juez; además, no es una tercera instancia, se trata de un mecanismo residual o subsidiario, como se desprende del art. 86 de la Constitución Nacional y el Decreto 2591 de 1991, de ahí que se cuenta con otro mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En términos del art. 48 de la Constitución Nacional, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia y solidaridad, en la forma que establece la Ley.

Así las cosas, la acción de tutela está llamada a prosperar, no solo ante circunstancias graves que puedan comprometer la existencia biológica de una persona o que ponga al borde de la muerte, sino frente a eventos que, a pesar de ser de menor gravedad, perturben el núcleo esencial del derecho a la vida y tengan la posibilidad de desvirtuar claramente la vida y la calidad de la misma en las personas, según cada caso específico.

Ha indicado la Corte en jurisprudencias que, no hay que esperar a que un nuevo evento se avecine para proteger el derecho de quien, en condiciones de debilidad manifiesta, difunde su incapacidad económica para acceder a tratamiento completo y del cual anuncia su insolvencia económica para realizar por sus medios, pues de hecho, ello truncaría los postulados constitucionales protegidos en los arts. 1, 11, 48 y 49 de la Constitución y que entre otras cosas, fueron reconocidos internacionalmente en el art. 22 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y art. 9 de la Ley 74 de 1998; por consiguiente, en cuanto a la determinación de peligro inminente de vulneración en el evento indicado, esta instancia no debe apartarse de su protección y amparo.

En estas circunstancias y teniendo como derroteros estos trazados jurisprudenciales, al igual que hoy, en muchas ocasiones no se ha encontrado razón alguna para que las empresas promotoras de salud denieguen este tipo de tratamientos o insumos en detrimento de la salud de sus afiliados, máxime cuando se debe garantizar la integralidad del tratamiento, asegurando el acceso real y efectivo y sin dilaciones a todos aquellos servicios que, en virtud de lo dispuesto por el médico tratante, se entiendan comprendidos para su caso particular dentro de la patología diagnosticada al paciente.

Es así que, de los derechos tutelados en la presente acción de tutela, el derecho a la vida está consagrado en el art. 11 Constitucional, notándose que el mismo es inviolable y en el 49 se dice que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizándose a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Es la vida, sin lugar a dudas el derecho fundamental por excelencia, ya que, por la existencia del ser, es por lo que se puede pregonar la existencia de los demás derechos del hombre, razón suficiente para que la constitución política consagre su protección en el preámbulo y en sus arts. 1, 2 y 11, siendo responsabilidad de las autoridades velar por su protección.

El derecho a la vida no involucra solo la existencia biológica, si no que a ella está vinculada la posibilidad de que, las personas desarrollen a plenitud todas sus facultades y funciones orgánicas; es decir, no basta con existir, es necesario que el ser humano este rodeado de todo aquello que se requiere para una subsistencia digna, aspecto este al que, en múltiples oportunidades como se anotó, se ha referido la Corte Constitucional concluyendo que no es solo el peligro inminente de la muerte el que amenaza el derecho a la vida, sino también, cuando está no es conservada en condiciones dignas.

De otro lado, en materia de seguridad social, la Ley 100 de 1993 en su Art 157 literal A, numeral 2 indica que los afiliados al sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el art. 211 de la misma Ley, son las personas, sin la capacidad de pago para cubrir el monto de la cotización. Serán subsidiadas en sistema de seguridad social en salud, la población más pobre y vulnerable del país.

Por su parte, el acuerdo 08 de 2009 de la comisión de regulación en salud comporta el plan obligatorio en salud y derogó el 306 de 2005, emanado del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de contera entiéndase que todo procedimiento que verse sobre su legítimo derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna, recae la responsabilidad de su protección en cabeza del Estado por mandato Constitucional, concluyéndose entonces, que es responsabilidad de CAPITAL SALUD EPS-S, prestar todo lo necesario para que se le garantice a la señora Ingrid Tatiana Velandia Melo, como representante legal de la menor víctima Karol Dallana Narváez Velandia, el acceso a los servicios de salud, de forma oportuna y eficaz, sin ningún tipo de obstáculo y que comporte todos aquellos medicamentos, intervenciones, citas, consultas médicas, procedimientos, exámenes que, requiera para tener un estilo de vida digno, según lo determine el médico tratante, sin dilaciones o traumatismos de las demás atenciones que, de ello se deriven.

La Corte Constitucional ha dicho que, el desacato hace referencia al incumplimiento a cualquier orden proferida por el Juez con base en las facultades que se le otorgan dentro del trámite de la acción de tutela y con ocasión de la misma situación que faculta al operador judicial para imponer la respectiva sanción; ello en el contexto de sus poderes disciplinarios, asimilados a los que le concede al juez.

Así el incidente de desacato, es un mecanismo de coerción del que disponen los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el cual se debe ajustar a los principios del derecho sancionador, garantizando el debido proceso al disciplinado. De esta manera, el solo incumplimiento del fallo no implica per se la imposición de la sanción, pues es necesario que se encuentre acreditada la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplirlo.

En concordancia con lo anterior, la Corte en Sentencia T-086/2003, señaló que el juez debe comprobar dos asuntos estrechamente relacionados, pero diferentes, a saber: I) verificar si hubo un incumplimiento y si éste fue total o parcial, con el fin de “identificar el medio adecuado para asegurar que se respete lo decidido” y, una vez verificado dicho incumplimiento, II) analizar si la sanción impuesta en el incidente de desacato es la correcta; esto es, “corroborar que no se ha presentado una violación de la Constitución o de la Ley, y asegurar de que la sanción es adecuada, dadas las circunstancias específicas de cada caso, para alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acción de tutela, asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia”.

Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, sistematizó como requisito a ser verificado para la imposición de la sanción por desacato en las acciones de tutela, lo siguiente:

“Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela que conoce del incidente de desacato, debe precisarse que el ámbito de acción el juez está definido por la parte resolutive del fallo correspondiente; por lo tanto, es su deber verificar: I) a quién estaba dirigida la orden; II) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; III) y el alcance de la misma. Esto con el fin de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa.

Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez verificada tal situación irregular, el juez debe encontrar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si existe responsabilidad, deberá imponer la sanción adecuada, proporcionada y razonable a los derechos fundamentales que se han vulnerado.

Al momento de evaluar si existió o no el desacato, el Juez debe tener en cuenta circunstancias excepcionales de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para cumplir, las cuales deben estar siempre avaladas por la buena fe de la persona obligada. En este sentido, conviene recordar los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha señalado como “eximentes” de responsabilidad de los obligados: (i) cuando la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa –porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso–; (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden, pero no se ha dado la oportunidad de hacerlo”

Ahora bien, la misma Corte ha precisado que, la finalidad última de dicho incidente, más allá de imponer la mera sanción, es “**lograr el cumplimiento efectivo** de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la “**protección**” de los derechos fundamentales con ella protegidos”. De manera que “en caso de que se inicie el trámite de un incidente de desacato y el accionado, reconoce que ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor”

Así las cosas, como es de mayor importancia garantizar el cumplimiento de las ordenes que surgen como mecanismo de protección a los derechos fundamentales, la tarea del juez se encamina a sancionar al incumplido, con el fin de corregir su actitud omisiva o su acción desobediente; es decir, **proveer la inmediata efectividad de la orden**; de lo contrario, las decisiones proferidas por los jueces pasarían a constituir una garantía meramente **"formal"** y no real, quedando su cumplimiento y por consiguiente, el amparo concedido en vía de tutela, al arbitrio de la autoridad o del particular destinatario del fallo.

El caso en concreto.

Debe tenerse en cuenta que las órdenes emanadas por el juez de tutela son de **estricto cumplimiento**, tanto así, que la ley contempla mecanismos que tienen como objeto asegurar el cumplimiento de las sentencias de tutela, las cuales pueden conllevar incluso, la aplicación de sanciones para quienes pretermitan el cumplimiento de la orden; esto es, para quienes se constituyen en desacato a la orden judicial.

Como se expuso inicialmente, en sentencia No. 006 de fecha abril 05 de 2021, el juez profirió fallo de tutela favorable a la actora, entiéndase que fue clara en explicar en sus numerales SEGUNDO y TERCERO, que dice: "ORDENAR a Capital Salud Eps-s, que, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, realice la entrega real y material de la cantidad del medicamento TOPIRAMATO 15 MG CX60 CAP (TOPAMAC SPRING cantidad 180 y de los pañales desechables, marca WINNY, ETAPA 5 en cantidad de 270 unidades. El numeral TERCERO explica la misma orden a SIKUANY LTDA., y el numeral QUINTO. REQUIERE a CAPITAL SALUD EPS-S, para que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en acciones y omisiones que pongan en riesgo la salud y la vida en condiciones dignas de la menor Karoll Dallana Narváez Velandia, en aras de evitar futuras acciones constitucionales".

Entonces, ella no tiene por qué sufrir ningún tipo de tropiezos ni que se le deniegue su atención con argumentos fuera de contexto sobre los derechos fundamentales a la salud y a la vida que son elementos que deben primar con su apreciación ontológica, sobre cualquiera de los otros derechos pregonados en la Constitución Política.

Si nos vamos al art. 52 del Decreto 2591 de 1991 (reglamentario del art. 86 de la Constitución Política) dice:

"La persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente Decreto, incurrirá en Desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa de 20 SMMLV, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar".

Se tiene que las empresas accionadas CAPITAL SALUD EPS-S y SIKUANY LTDA., recibe las notificaciones y traslados ordenados, quienes contestaron la demanda en términos, informando que han dado cumplimiento a lo solicitado por la accionante, por lo que, solicitan se archive el expediente, toda vez que no se ha vulnerado derecho alguno, ya que se ha realizado la entrega de los medicamentos e insumos solicitados.

Coincide lo anterior, con la afirmación que hace la incidentante, mediante conversación telefónica sostenida, donde manifiesta que si le cumplieron con lo ordenado en el fallo y que a la fecha están al día, que si bien Sikuan y no lo había hecho, ya lo hizo.

Consecuente, a las razones expuestas, el Despacho no encuentra mérito para sancionar por Desacato al representante legal de CAPITAL SALUD EPS-S, y de SIKUANY LTDA., considerando viable declarar superado el derecho fundamental invocado por la incidentista, por sustracción de materia. Siendo así, se decretará la terminación del proceso de incidente de desacato y se ordenará su archivo.

No sin antes, reiterar a las incidentadas CAPITAL SALUD EPS-S., y SIKUANY LTDA., que deberán continuar cumpliendo a cabalidad lo ordenado en todos los numerales de la parte resolutive del fallo de tutela No. 006 de fecha abril 05 de 2021; con el fin de, garantizar los derechos fundamentales a la Salud y a la Vida en condiciones Dignas de la menor de edad Karoll Dallana Narváez Velandia y así evitar, se presenten a futuro nuevos incidentes de Desacato y posibles sanciones, sobre este mismo caso.

IV. DECISION.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Macarena Meta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

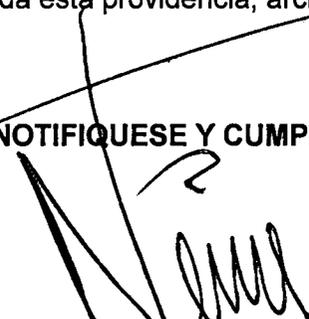
RESUELVE:

PRIMERO: **DECLARAR** la ocurrencia de un hecho superado por sustracción de materia, respecto a los derechos fundamentales invocados por la señora INGRID TATIANA VELANDIA MELO, Representante Legal de la menor de edad Karoll Dallana Narváez Velandia, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de este auto. No sin antes, señalar lo siguiente:

SEGUNDO: **REITERAR** a las incidentadas CAPITAL SALUD EPS-S., y SIKUANY LTDA., que deberán continuar cumpliendo a cabalidad lo ordenado en todos los numerales de la parte resolutive del fallo de tutela No. 006 de fecha abril 05 de 2021; con el fin de, garantizar los derechos fundamentales a la Salud y a la Vida en condiciones Dignas de la menor de edad Karoll Dallana Narváez Velandia y así evitar, se presenten a futuro nuevos incidentes de Desacato y posibles sanciones, sobre este mismo caso.

TERCERO: **DECRETAR** la terminación del presente Incidente de Desacato y en consecuencia, una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, dejando las anotaciones pertinentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:


RAFAEL IGNACIO NEIRA PEÑARETE
Juez

